



# CONFLICTOS SOCIALES AFECTARÍAN A 38 MEGAPROYECTOS

Comprende inversión equivalente al 16,3% del PBI,  
donde 24 de ellos pertenecen a la actividad minera.





Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo  
 Instituto de Economía y Desarrollo  
 Empresarial - CCL  
 cpenaranda@camaralima.org.pe

**E**l Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima observó que los llamados conflictos sociales (CS), mayormente ambientales, se han ido incrementando en el país en los últimos años.

La Defensoría del Pueblo (DP) define a los conflictos sociales como un proceso complejo por el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, originando una situación que podría derivar en violencia. Esto aunado a la ausencia del Estado en sus funciones básicas y fundamentales, especialmente en las zonas del interior del país, directamente relacionadas con la salud, educación, servicios básicos, infraestructura, seguridad y justicia, generan insatisfacción e inestabilidad social y política lo que coadyuva a la presencia de estos procesos que se inician y manifiestan generalmente como reacción a temas de agua y ambientales.

Tal como se observa en el “Reporte de Conflictos Sociales” de periodicidad mensual elaborado por la DP, en agosto de 2019 se registró un total de 186 de los cuales 138 tuvieron la condición de activos, calificados así cuando una de las partes realiza demandas públicas. Los 48 conflictos sociales restantes se encontraron en estado latente, es decir, sin manifestarse

vía demandas o que hayan dejado de hacerlo durante un tiempo considerable. A la fecha se tienen 86 de 138 conflictos activos en etapa de diálogo, de los cuales 80 se encuentran en mesa de diálogo, mientras los seis restantes se encuentran en reuniones preparatorias para ello.

El número total de estos conflictos ha mostrado tendencia creciente que empezó en enero de 2018 (176) hasta alcanzar un pico en septiembre (202) del mismo año.

## LAS DEMANDAS SOCIOAMBIENTALES SE HAN ACELERADO EN EL ÚLTIMO AÑO

Estos disminuyeron hasta febrero del presente año (179) para luego ir al alza sobre todo en los últimos cuatro meses hasta llegar al pico de 186 en el mes de agosto. Los conflictos sociales conocidos como socio ambientales que incluyen minería, hidrocarburos, energía, forestal, entre otros; son los que especialmente se han acelerado en el presente año pasando de 113 a 123 entre diciembre de 2018 y agosto de 2019. Esto ha determinado que

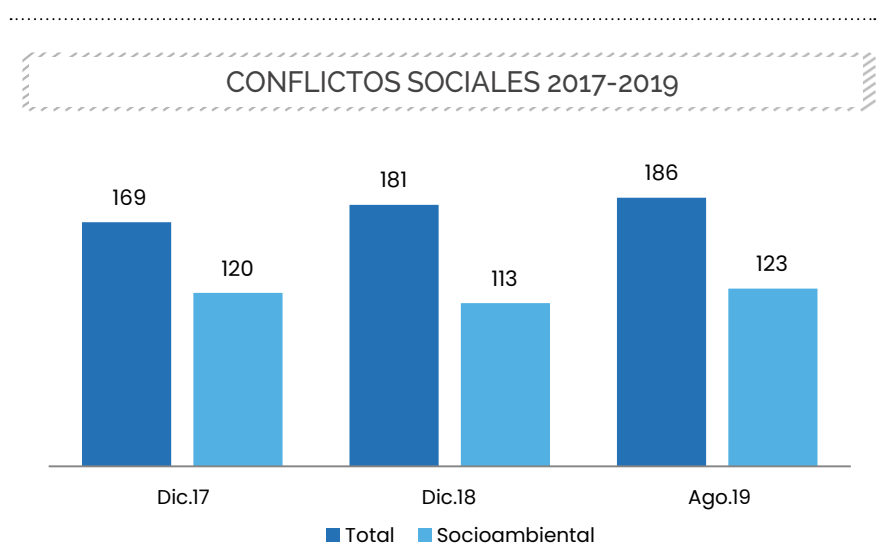
estos últimos tengan mayor presencia (66,1%) en el total de los conflictos sociales.

## CARTERA DE INVERSIÓN

El IEDEP con base en el documento “Cartera de Proyectos de Inversión 2019-2024” (CPI 2019-2024), que comprende un total de 363 proyectos con compromisos de inversión por US\$ 115.467 millones, ha identificado el número de megaproyectos de los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad y transporte que podrían verse afectados por algún tipo de conflicto social, específicamente los de características socio-ambientales registrados en el reporte de la DP.

El análisis muestra que de un total de 126 proyectos de gran envergadura -cuya inversión pendiente bordea los US\$ 92.000 millones- son 38 los proyectos involucrados en los conflictos referidos (activos y latentes) que en conjunto afectan potencialmente una inversión de US\$ 38.374 millones. Es decir, se trata del 30,2% de los megaproyectos con flujos de inversión equivalentes al 16,3% del PBI en riesgo de no concretar el avance o producción prevista.

De estos 38 proyectos paralizados, 24 son mineros (seis de exploración y



Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaboración: IEDEP



18 de explotación) con una inversión de US\$ 26.527 millones, cuatro de hidrocarburos por US\$ 11.530 millones, nueve de electricidad por US\$ 206 millones y uno de transporte por US\$ 111 millones.

Tal es el caso de los proyectos mineros Cotabambas, Palca, Tantauatay 4, Corocchohuayco, Caylloma 1, 2 y 3 Etapa B y Shahuindo, los cuales ya tienen una agenda con problemas por resolver a pesar de encontrarse en etapa de exploración.

Por otro lado, los 38 megaproyectos con conflictos sociales están distribuidos en 14 regiones de los cuales Áncash concentra seis. Le sigue Cajamarca (5); Arequipa (4); Apurímac, La Libertad y Junín, con tres cada uno; Cusco, Huánuco y Piura, albergan dos por región; y, finalmente, Lambayeque, Loreto, Moquegua y Puno, con un solo proyecto. Cabe resaltar que, además, se identifican cuatro conflictos vinculados a proyectos calificados como multiregionales.

## HACIA LA PROACTIVIDAD

Un documento del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) de 2017, conforme a lo mencionado anteriormente, encontró que la precariedad en las condiciones

de vida guardan estrecha relación con el surgimiento de los conflictos sociales. Y, desde un punto de vista cualitativo, la fragilidad de un aparato institucional y legal sólido puede retroalimentar su aparición ya que no se hace seguimiento a los acuerdos consensuados, incentivando a su rompimiento por una de las partes.

## EL ROL DEL ESTADO CANADIENSE ES SER MEDIADOR ENTRE LAS COMUNIDADES Y LA EMPRESA

Canadá, como potencia extractiva, es un ejemplo de lo que se puede lograr mediante mecanismos de diálogo debido a que reconocen en su totalidad a las poblaciones indígenas y, en algunos casos, reconocen la decisión sobre el uso de sus tierras. En ese sentido, el rol del Estado canadiense es protagónico ya que es el principal mediador entre las comunidades y la empresa, transparentando los efectos positivos y negativos de la actividad con la finalidad de alcanzar el mayor consenso posible. Pese a que en Perú se tienen avances en estos aspectos,

como el reconocimiento de poblaciones indígenas y mecanismos de consulta previa; un grave problema radica en la actitud reactiva frente a los conflictos sociales en lugar de una actitud preventiva.

Por su parte, otras recomendaciones para mejorar la gobernanza en estos procesos complejos pueden ser extraídas de una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2017 donde se estudiaron 200 proyectos de infraestructura que experimentaron algún conflicto social en las últimas cuatro décadas pertenecientes a 20 países de América Latina y el Caribe e inmersos en seis sectores económicos: extractivo, energía, residuos, agua, transporte y desarrollo urbano.

El estudio expone el origen multidimensional de los conflictos que comprende factores como la preocupación por la degradación del medioambiente (144), los pocos beneficios para la comunidad (168), falta de consultas adecuadas (148) e incumplimientos de acuerdos gubernamentales (76). Además, reveló que 140 proyectos fueron afectados previamente a sus inicios de operaciones.

Asimismo, reportó que 36 proyectos fueron cancelados, 162 sufrieron atrasos, 116 enfrentaron sobrecostos, 190 dañaron su reputación y 44 redujeron su productividad.

Al respecto, el IEDEP consideró que para el caso peruano, los gobiernos nacional, regional y local, en coordinación con las empresas involucradas, deben dar prioridad a las zonas con proyectos potenciales en cuanto a dotarlos de los servicios básicos y reducir la insatisfacción social.

El Fondo de Adelanto Social (FAS) puede constituirse en un potente mecanismo para ello; ello sin perjuicio de garantizar proyectos con tecnología limpia desde el punto de vista ambiental.

### MEGAPROYECTOS CON PRESENCIA DE CONFLICTOS SOCIALES 2019-2024

Sectores	N ° proyectos	Inversión pendiente (US\$)
Minería	24	26.527
Hidrocarburos	4	11.530
Electricidad	9	206
Transporte	1	111
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>38.374</b>

Fuente: Cartera de proyectos de inversión 2019-2024

Elaboración: IEDEP